

La alfabetización jurídica frente a las desigualdades del acceso a la justicia

Guadalupe Magdalena Sánchez Palacios

En las últimas décadas, el acceso a la justicia se ha convertido en una preocupación central para las ciencias jurídicas y sociales. Aunque los Estados contemporáneos han desarrollado marcos normativos amplios para la protección de los derechos humanos, la existencia de leyes e instituciones no garantiza por sí misma que todas las personas puedan ejercer efectivamente sus derechos. Entre el reconocimiento formal de un derecho y la posibilidad real de hacerlo valer existe una distancia que suele estar determinada por factores sociales, económicos, educativos y culturales.

México constituye un ejemplo para analizar esta problemática. Nuestro país se caracteriza por importantes contrastes sociales, donde amplios sectores de la población enfrentan condiciones de desigualdad que repercuten directamente en su relación con las instituciones públicas. La justicia no escapa a esta realidad. El conocimiento sobre los procedimientos legales, las autoridades competentes y los mecanismos de protección de derechos suele distribuirse de manera desigual entre los distintos grupos sociales. Mientras algunas personas cuentan con recursos educativos, económicos o profesionales que facilitan su interacción con el sistema jurídico, otras deben enfrentar procesos complejos sin disponer de información suficiente para comprenderlos plenamente.

En este contexto, la alfabetización jurídica adquiere relevancia. Así como la alfabetización científica permite comprender fenómenos relacionados con la ciencia o la alfabetización digital facilita la interacción con tecnologías contemporáneas, la alfabetización jurídica busca proporcionar herramientas para comprender el lenguaje del derecho y participar de manera informada en la vida jurídica de una sociedad democrática. Por lo tanto, se trata de una propuesta que busca acercar el conocimiento jurídico a la ciudadanía y reducir algunas de las barreras que dificultan el ejercicio efectivo de los derechos.



Este artículo tiene como objetivo analizar la importancia de la alfabetización jurídica como una herramienta para reducir las barreras de acceso a la justicia en México, particularmente en un contexto marcado por profundas desigualdades sociales.

La desigualdad y sus efectos sobre el acceso a la justicia

Con frecuencia, el acceso a la justicia se analiza desde una perspectiva institucional. Por ejemplo, se discute la eficiencia de los juzgados, la capacidad de las fiscalías o la calidad de las normas jurídicas. Sin embargo, existe otra dimensión igualmente importante: las condiciones sociales que permiten o dificultan que las personas utilicen esas instituciones.

Las desigualdades económicas constituyen uno de los factores más visibles. Contratar asesoría jurídica especializada, trasladarse para realizar trámites o sostener procedimientos prolongados implica costos que no todas las personas pueden asumir. Aunque existen mecanismos públicos de asistencia jurídica, las diferencias en recursos económicos continúan influyendo en las posibilidades de defensa y representación legal.

No obstante, las desigualdades relacionadas con el conocimiento suelen recibir menor atención. Muchas personas desconocen qué autoridad debe atender una denuncia, cuáles son los pasos de un procedimiento o qué derechos les asisten en determinadas situaciones. Esta falta de información puede generar dependencia de terceros, desconfianza hacia las instituciones o incluso la renuncia a reclamar derechos que han sido vulnerados.

La situación adquiere particular relevancia en un contexto donde las transformaciones económicas asociadas al neoliberalismo han reforzado procesos de individualización de las responsabilidades sociales. En este escenario, el acceso a diversos bienes y servicios suele depender crecientemente de los recursos disponibles para cada persona. Aunque la justicia constituye una función pública fundamental, las capacidades para interactuar con ella tampoco se distribuyen de manera homogénea. La desigualdad educativa profundiza estas diferencias. Comprender documentos oficiales, interpretar procedimientos administrativos o identificar derechos requiere

habilidades de lectura y comprensión que no siempre están disponibles en todos los sectores de la población. Así, la distancia entre el lenguaje jurídico y la experiencia cotidiana de muchas personas puede convertirse en una barrera significativa para el acceso a la justicia.

Lo anterior no significa que el problema radique exclusivamente en las capacidades individuales. También implica reconocer que las instituciones suelen comunicarse mediante formatos complejos, procedimientos especializados y terminología técnica que dificultan la participación ciudadana. En consecuencia, la construcción de una justicia más accesible exige tanto fortalecer las capacidades de la ciudadanía como promover formas de comunicación institucional más claras y comprensibles.

En nuestro país, donde persisten importantes brechas sociales, económicas y educativas, el acceso a la justicia no puede entenderse únicamente como la existencia de tribunales o leyes. Implica preguntarnos quiénes poseen las herramientas necesarias para comprender el sistema jurídico y quiénes enfrentan mayores obstáculos para hacerlo.

La alfabetización jurídica como herramienta para la formación de ciudadanía

Antes de hablar de alfabetización jurídica es necesario comprender qué significa alfabetización. Tradicionalmente, este concepto se asociaba con la capacidad de leer y escribir. Sin embargo, actualmente las ciencias sociales y educativas utilizan el término para referirse a procesos más amplios de adquisición de conocimientos y habilidades que permiten comprender información, interpretarla y utilizarla en distintos ámbitos de la vida social.

Desde esta perspectiva, alfabetizar no consiste únicamente en transmitir información. Implica desarrollar capacidades para comprender determinados lenguajes, interpretar contextos, resolver problemas, participar de manera más activa en la sociedad, y comunicar esta misma información de manera crítica. Por ello, se habla también de alfabetización científica, digital, financiera o mediática. Todas ellas buscan que las personas puedan desenvolverse con mayor autonomía frente a entornos cada vez más complejos.



La alfabetización jurídica podemos considerarla desde esta ampliación conceptual. Puede entenderse como el proceso mediante el cual las personas adquieren conocimientos, habilidades y herramientas básicas para comprender el lenguaje del derecho y desenvolverse de manera informada frente a las instituciones. Su finalidad no es formar especialistas, sino acercar el conocimiento jurídico a la ciudadanía para que pueda reconocer derechos, comprender obligaciones e identificar mecanismos de protección cuando éstos resulten necesarios.

En otras palabras, la alfabetización jurídica busca que el derecho deje de percibirse como un ámbito reservado exclusivamente para jueces, abogados o funcionarios públicos. Su propósito consiste en acercar a la ciudadanía los conocimientos fundamentales que le permitan interactuar de manera más informada con las instituciones encargadas de garantizar derechos.

Desde esta perspectiva, la alfabetización jurídica representa una forma específica de educación para la ciudadanía. Cervantes (2020) plantea que este concepto implica la construcción de un lenguaje ciudadano relacionado con el derecho desde etapas tempranas de formación. La autora sostiene que la educación puede contribuir a desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes que permitan a las personas relacionarse de manera más informada tanto con otros ciudadanos como con las autoridades públicas a lo largo de su vida.

Su propuesta resulta especialmente relevante en contextos caracterizados por profundas desigualdades sociales. Cuando el conocimiento jurídico permanece concentrado en grupos especializados, las diferencias económicas y educativas también se reflejan en la capacidad para comprender procedimientos, exigir derechos o participar en espacios institucionales. Por ello, la alfabetización jurídica puede entenderse como una herramienta que busca ampliar capacidades ciudadanas y fortalecer el acceso al conocimiento sobre el funcionamiento del Estado.

La alfabetización jurídica tampoco debe reducirse al aprendizaje de normas legales. Implica comprender cómo operan las instituciones, identificar cuándo un derecho ha sido vulnerado, reconocer qué mecanismos de protección existen y saber a qué instancias acudir frente a una situación determinada.

¿Por qué es importante conocer el funcionamiento del sistema penal?

La importancia de la alfabetización jurídica se vuelve particularmente evidente cuando se analiza el funcionamiento del sistema penal. Aunque muchas personas no mantienen contacto cotidiano con juzgados o fiscalías, cualquier persona puede verse involucrado en algún momento como víctima de un delito, testigo, denunciante o persona investigada.

Desde la reforma constitucional de 2008, México cuenta con un sistema penal acusatorio y oral que transformó significativamente la forma de investigar y juzgar los delitos. Sin embargo, una parte importante de la población continúa desconociendo aspectos básicos de este modelo, lo que genera confusión respecto de los procedimientos y las funciones de las autoridades involucradas. Un ejemplo frecuente aparece en relación con las denuncias penales. Muchas personas consideran que presentar una denuncia conduce automáticamente a un juicio. Sin embargo, la denuncia constituye apenas el inicio de una investigación en la que participan fiscalías, policías de investigación, asesores jurídicos de víctimas y defensores públicos. Comprender estas etapas permite dimensionar de manera más realista las posibilidades y alcances del procedimiento penal. Otro aspecto relevante se relaciona con los derechos de las víctimas. La Constitución y las leyes mexicanas reconocen el derecho a recibir información sobre el desarrollo de la investigación, a contar con asesoría jurídica y a participar en distintas etapas del proceso. No obstante, estos derechos suelen ser poco conocidos por quienes enfrentan situaciones de victimización.

Algo similar ocurre con los derechos de las personas investigadas o detenidas. El derecho a guardar silencio, a contar con una defensa adecuada y a ser informadas sobre los motivos de una detención forman parte de las garantías fundamentales del debido proceso. Sin embargo, muchas personas desconocen estos derechos hasta que enfrentan directamente una situación de esta naturaleza.

La presunción de inocencia constituye otro ejemplo significativo. Aunque se trata de uno de los principios fundamentales del sistema penal contemporáneo, suele interpretarse de manera equivocada en la conversación pública. Comprender que toda persona debe ser considerada inocente hasta que una sentencia firme determine lo contrario permite entender mejor las garantías que sustentan el funcionamiento de una sociedad democrática.



La alfabetización jurídica también resulta importante para comprender mecanismos alternativos de solución de controversias, como la mediación o los acuerdos reparatorios. En determinados casos, estas herramientas permiten resolver conflictos sin necesidad de llegar a juicio, pero muchas personas desconocen su existencia o las posibilidades que ofrecen.

Las investigaciones sobre alfabetización jurídica muestran que estos conocimientos tienen efectos prácticos relevantes. Pérez (2022), al estudiar talleres desarrollados en centros penitenciarios, observó que el aprendizaje sobre procedimientos judiciales y documentos legales ayudaba a las personas a comprender mejor sus propios procesos, identificar a las autoridades involucradas y desarrollar estrategias más efectivas para relacionarse con el sistema de justicia. En términos generales, el conocimiento jurídico contribuía a reducir la distancia entre los individuos y las instituciones encargadas de resolver conflictos.

Estos hallazgos permiten comprender que la alfabetización jurídica no constituye únicamente una herramienta educativa. También puede convertirse en un recurso que fortalece la capacidad de las personas para participar de manera más activa e informada en los procedimientos que afectan directamente sus derechos y libertades.

El derecho como lenguaje y la construcción de una cultura jurídica accesible

Uno de los aportes más interesantes de los estudios sobre alfabetización jurídica consiste en reconocer que el derecho funciona, en gran medida, a través del lenguaje. Las leyes se redactan mediante textos, las resoluciones judiciales se expresan por escrito y los argumentos jurídicos se construyen mediante procesos de interpretación y comunicación.

Esta característica explica por qué el lenguaje puede convertirse simultáneamente en una herramienta de acceso y en una barrera de exclusión. Cuando los términos jurídicos resultan excesivamente técnicos o difíciles de comprender, las personas pueden experimentar dificultades para participar plenamente en los procedimientos que les afectan.

Camarillo (2021) señala que el derecho depende de competencias relacionadas con la lectura, la escritura, la comprensión y la argumentación. La elaboración de normas jurídicas, su interpretación y su aplicación requieren capacidades lingüísticas específicas. Desde esta perspectiva, fortalecer la literacidad jurídica implica desarrollar habilidades que permitan comprender textos legales y construir razonamientos relacionados con el derecho. Esta observación resulta relevante no sólo para quienes estudian la carrera de derecho, sino también para la ciudadanía en general. Comprender una resolución administrativa, interpretar información sobre derechos humanos o presentar una solicitud ante una autoridad son actividades que requieren determinadas competencias comunicativas.

Por ello, la alfabetización jurídica también exige reflexionar sobre la forma en que las instituciones comunican información. En años recientes diversos organismos públicos han impulsado sentencias en formato de lectura fácil, materiales informativos dirigidos a públicos no especializados y estrategias de lenguaje ciudadano orientadas a facilitar la comprensión de documentos jurídicos.

No obstante, los desafíos continúan siendo importantes. En muchos ámbitos, la comunicación institucional sigue recurriendo a terminología especializada que dificulta la comprensión. Del mismo modo, los contenidos relacionados con derechos humanos, instituciones públicas y cultura jurídica ocupan todavía un espacio reducido dentro de los programas educativos.

Promover una cultura jurídica accesible implica reconocer que el conocimiento sobre el derecho constituye un componente relevante de la ciudadanía democrática. Una sociedad en la que las personas comprenden mejor sus derechos y las instituciones encargadas de protegerlos dispone de mayores herramientas para participar en la vida pública y exigir rendición de cuentas.



Conclusiones

El objetivo de este artículo fue analizar la importancia de la alfabetización jurídica como una herramienta para reducir las barreras de acceso a la justicia en México dentro de un contexto caracterizado por profundas desigualdades sociales. Por ello, nuestro análisis mostró que las dificultades de acceso a la justicia no dependen exclusivamente del funcionamiento de las instituciones. También están asociadas con desigualdades educativas, económicas y culturales que influyen en la capacidad de las personas para comprender procedimientos, reconocer derechos e interactuar con autoridades públicas. En este sentido, la distribución desigual del conocimiento jurídico constituye una dimensión relevante de las brechas existentes en el acceso a la justicia.

Asimismo, se mencionó que la alfabetización jurídica representa una expresión particular de los procesos de alfabetización contemporáneos. Así como otros tipos de alfabetización buscan desarrollar capacidades para comprender ámbitos específicos de la vida social, la alfabetización jurídica procura que las personas adquieran herramientas para comprender el lenguaje del derecho y participar de manera más informada en las relaciones que mantienen con las instituciones públicas.

A la luz de lo expuesto, puede afirmarse que la alfabetización jurídica constituye una herramienta relevante para acercar el conocimiento del derecho a la ciudadanía y contribuir a disminuir algunas de las barreras que dificultan el acceso a la justicia. Aunque no puede resolver por sí sola las desigualdades estructurales que atraviesan a nuestra sociedad, sí representa un componente importante dentro de las estrategias orientadas a fortalecer la participación ciudadana, ampliar el conocimiento sobre el funcionamiento de las instituciones y favorecer el ejercicio efectivo de los derechos.

Referencias bibliográficas

- Camarillo Hinojoza, H. M. (2021). Literacidad en el derecho: Aproximaciones a partir de un corpus de ensayos sobre argumentación jurídica. *Lenguaje*, 49(1), 135–164.
- Cervantes Ayala, P. A. (2020). Aproximaciones hacia una política educativa para la alfabetización jurídica. *Díké. Revista de Investigación en Derecho, Criminología y Consultoría Jurídica*, 14(27), 203–225.
- Pérez, C. (2022). “Acá la gente firma cualquier cosa”: La importancia del taller de alfabetización jurídica en una cárcel de la provincia de Buenos Aires. *Dilemas: Revista de Estudios de Conflicto e Controle Social*, 15(2), 643–667. <https://doi.org/10.4322/dilemas.v15n2.42051>

La alfabetización jurídica frente a las desigualdades del acceso a la justicia

Legal Literacy in the Face of Inequalities in Access to Justice

Guadalupe Magdalena Sánchez Palacios.

gpesanchezp@gmail.com

Resumen: El presente artículo analiza la relevancia de la alfabetización jurídica como una herramienta para enfrentar algunas de las barreras que limitan el acceso a la justicia en México. En un contexto caracterizado por profundas desigualdades sociales, económicas y educativas, el conocimiento jurídico suele distribuirse de manera desigual entre distintos sectores de la población, lo que influye en la capacidad de las personas para comprender procedimientos, identificar derechos e interactuar con las instituciones públicas. Se examina la relación entre desigualdad y acceso a la justicia, así como el concepto de alfabetización jurídica entendido como un proceso de formación ciudadana orientado al desarrollo de conocimientos y habilidades para comprender el lenguaje del derecho.

Palabras clave: Alfabetización jurídica; acceso a la justicia; ciudadanía; desigualdad social; cultura jurídica.

Abstract: This article examines the importance of legal literacy as a tool for addressing some of the barriers that limit access to justice in Mexico. In a context marked by deep social, economic, and educational inequalities, legal knowledge is unevenly distributed across different sectors of society, shaping people's ability to understand legal procedures, recognize their rights, and engage with public institutions. The article explores the relationship between inequality and access to justice, as well as the concept of legal literacy, understood as a process of civic education that helps individuals develop the knowledge and skills needed to understand the language of law. From this perspective, legal literacy is presented as an important resource for strengthening citizenship, fostering greater understanding of legal institutions, and supporting a more informed exercise of rights.

Keywords: Legal literacy; access to justice; citizenship; social inequality; legal culture.

****** Abogada por la Escuela Libre de Derecho (ELD), maestra en criminalística por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), y doctora en Educación por la Universidad de España y México.

Cómo citar

Sánchez Palacios G. (2026) *La alfabetización jurídica frente a las desigualdades del acceso a la justicia*, *Teoría y Praxis Social Ilustrada*, 1(1), 96 - 108.